



PRIMER BALANCE DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE CORRUPCIÓN (OCC): SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO DE LIMA INDICADORES NORMATIVOS

Fotografía: Gayatri Malhotra | Unsplash





Resumen

El OCC está conformado por una coalición de organizaciones de sociedad civil y actores sociales de 19 países del continente americano¹, quienes de manera conjunta han adelantado un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por los gobiernos de la región en la VIII Cumbre de las Américas celebrada en 2018 en Lima, Perú

Este documento presenta un primer balance del marco normativo existente en los países participantes en el OCC a partir de los compromisos priorizados VIII Cumbre de las Américas para avanzar en la lucha contra la corrupción. La información que se presenta surge de la recopilación y revisión del estado de la normativa y jurisprudencia actualmente vigente en los países que forman parte de esta iniciativa¹. Al ser un informe de carácter preliminar, recoge y analiza los datos agregados de la revisión del marco normativo y permite dar cuenta de las condiciones de base necesarias para enfrentar este flagelo.

En general los 19 participantes del OCC cuentan con un marco normativo amplio para avanzar en la lucha contra la corrupción. No obstante, este balance preliminar muestra la necesidad de abordar distintas estrategias nacionales y regionales para apoyar a los países que presentan los menores desarrollos normativos relacionados con estos compromisos. De la misma forma es necesario avanzar en estrategias que permitan la efectiva inclusión de los nuevos enfoques de la lucha contra la corrupción para obtener mejores resultados en la materia.

Introducción

El proyecto “Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) - Seguimiento al Compromiso de Lima” tiene como principal propósito fortalecer el Foro Ciudadano de las Américas (FCA) mediante la co-creación, junto con la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), de un observatorio que ofrece apoyo técnico a la implementación del proyecto Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas (PASCA).

El OCC está conformado por una coalición de organizaciones de sociedad civil y actores sociales de 19 países del continente americano¹, quienes de manera conjunta han adelantado un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por los gobiernos de la región en la VIII Cumbre de las Américas celebrada en 2018 en Lima, Perú. Como resultado de esta

¹ En cada país participante del OCC la recolección de los indicadores normativos estuvo a cargo de una organización de sociedad civil que cumple el rol de coordinación nacional, sin embargo, los resultados de la valoración de los indicadores normativos fueron socializados y complementados por las demás organizaciones sociales participantes en el OCC.



Cumbre, los países firmaron el Compromiso de Lima “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, el cual recoge 57 compromisos en torno a la adopción y avance de medidas de lucha contra la corrupción en la región. Entre los meses de noviembre de 2020 y junio de 2021, más de 150 organizaciones sociales participantes de este proyecto han venido aplicando una metodología participativa de análisis y valoración del avance en estos compromisos². Esta metodología³ parte de la identificación de indicadores de norma y de práctica y de la selección de unos criterios para valorar el nivel de avance en cada uno de los compromisos analizados. A partir de esto, se seleccionaron 19 compromisos, clasificados en los siguientes 5 temas:

- I. **Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática**, el cual contempla compromisos relacionados con autonomía judicial, la promoción de la equidad de género e inclusión de grupos en condición de vulnerabilidad en las políticas anticorrupción los procesos de selección de servidores públicos, la prevención de conflictos de intereses y la promoción de códigos de conducta.
- II. **Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Denunciantes y Derechos Humanos**, incluyendo la libertad de expresión, el cual contempla compromisos asociados con la participación ciudadana, programas de gobierno abierto, la autonomía e independencia de los órganos de control, el fortalecimiento de los órganos de transparencia y la elaboración de estadísticas e indicadores de seguimiento a las políticas, entre otros.
- III. **Financiamiento de Organizaciones Políticas y Campañas Electorales**, el cual se enfoca en la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos.
- IV. **Prevención de la Corrupción en Obras Públicas, Contrataciones y Compras Públicas**, enfocado en compromisos relacionados con la promoción de los sistemas electrónicos de compras gubernamentales y de cláusulas anticorrupción y, la reducción de la burocracia.
- V. **Cooperación Jurídica Internacional; Combate al Cohecho, al Soborno Internacional, al Crimen Organizado y al Lavado de Activos**; y recuperación de activos, enfocado en la promoción de la cooperación de las entidades interadministrativas y la consolidación de medidas para consolidar el embargo preventivo por casos de corrupción.

² Entre estas organizaciones se encuentran capítulos de Transparencia Internacional en la región y organizaciones de sociedad civil que forman parte del Foro Ciudadano de las Américas.

³ La Guía metodológica para el seguimiento a los compromisos se puede consultar en el siguiente enlace: <https://occ-america.com/metodologia/>



A continuación, se presenta un primer balance del marco normativo existente en los países participantes en el OCC a partir de los compromisos priorizados VIII Cumbre de las Américas para avanzar en la lucha contra la corrupción. La información que se presenta surge de la recopilación y revisión del estado de la normativa y jurisprudencia actualmente vigente en los países que forman parte de esta iniciativa⁴. Al ser un informe de carácter preliminar, recoge y analiza los datos agregados de la revisión del marco normativo y permite dar cuenta de las condiciones de base necesarias para enfrentar este flagelo, pero, no profundiza en el análisis de carácter contextual o de aplicación efectiva de esta normativa, tarea que se llevará a cabo a través de las demás etapas de la metodología de seguimiento, como se explica en el siguiente apartado.

Metodología de Seguimiento al Compromiso de Lima

Como ya se mencionó, la metodología para el seguimiento al Compromiso de Lima, busca determinar el nivel de avance o cumplimiento de los compromisos en cada país de la región que forma parte del OCC. Este seguimiento se basa en el análisis de cada compromiso a partir de unos indicadores normativos y de práctica y la ponderación del nivel de avance y cumplimiento de los mismos a partir de tres criterios: Pertinencia⁵, Eficacia⁶ y Sostenibilidad⁷.

Tanto la priorización de los 19 compromisos, como la construcción de los indicadores y el proceso de valoración contemplado en la metodología de seguimiento fueron desarrollados a partir de la revisión de documentos y evaluaciones a iniciativas anticorrupción, y tienen como objetivo, generar un conjunto de herramientas metodológicas que faciliten a las organizaciones de la sociedad civil hacer seguimiento al Compromiso de Lima. La siguiente gráfica describe el proceso de construcción de la metodología:

⁴ En cada país participante del OCC la recolección de los indicadores normativos estuvo a cargo de una organización de sociedad civil que cumple el rol de coordinación nacional, sin embargo, los resultados de la valoración de los indicadores normativos fueron socializados y complementados por las demás organizaciones sociales participantes en el OCC.

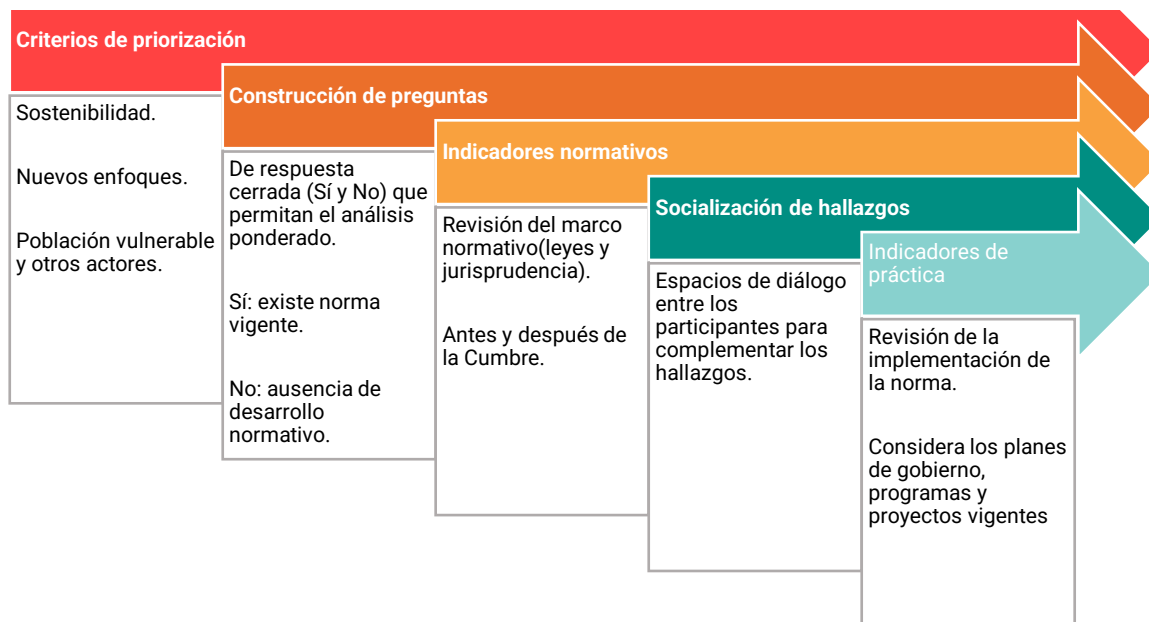
⁵ El criterio de eficacia busca establecer en qué medida las acciones realizadas por el gobierno - como resultado del Compromiso de Lima - contribuyen a la lucha contra la corrupción en el país.

⁶ La pertinencia busca determinar en qué medida las acciones desarrolladas por el gobierno son oportunas, convenientes y adecuadas de acuerdo con el contexto económico, institucional y/o social del país.

⁷ La sostenibilidad busca determinar en qué medida las acciones realizadas para cumplir con el compromiso, tendrán continuidad en el tiempo

Gráfica 1: Metodología para el monitoreo de la implementación del Compromiso de Lima

Metodología para el Monitoreo de la Implementación del Compromiso de Lima



Elaboración propia con base en la metodología del OCC

Los indicadores normativos **se componen de 74 preguntas de respuesta cerrada (Sí o No)**⁸; entre éstas, se incluyen 12 preguntas orientadas a determinar si las normas son posteriores a la firma del Compromiso de Lima. Las respuestas afirmativas muestran la existencia de normas o desarrollos jurisprudenciales que reglamentan los temas abordados en los compromisos; mientras que, las respuestas negativas, indican la ausencia o el poco desarrollo normativo en los compromisos priorizados. Para realizar el análisis normativo, cada país revisó la legislación vigente, los desarrollos jurisprudenciales y disposiciones legales de otras jerarquías según el caso.

1. Tendencias Generales de Desarrollos Normativos en la Región.

La siguiente gráfica presenta las tendencias generales de los desarrollos normativos en la región para avanzar en la lucha contra la corrupción:

⁸ Las preguntas normativas se pueden consultar en el siguiente enlace: <https://occ-america.com/metodologia/>

Gráfica 2: Resultados de los indicadores normativos por eje temático

Resultados de los Indicadores Normativos por Eje Temático



Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC

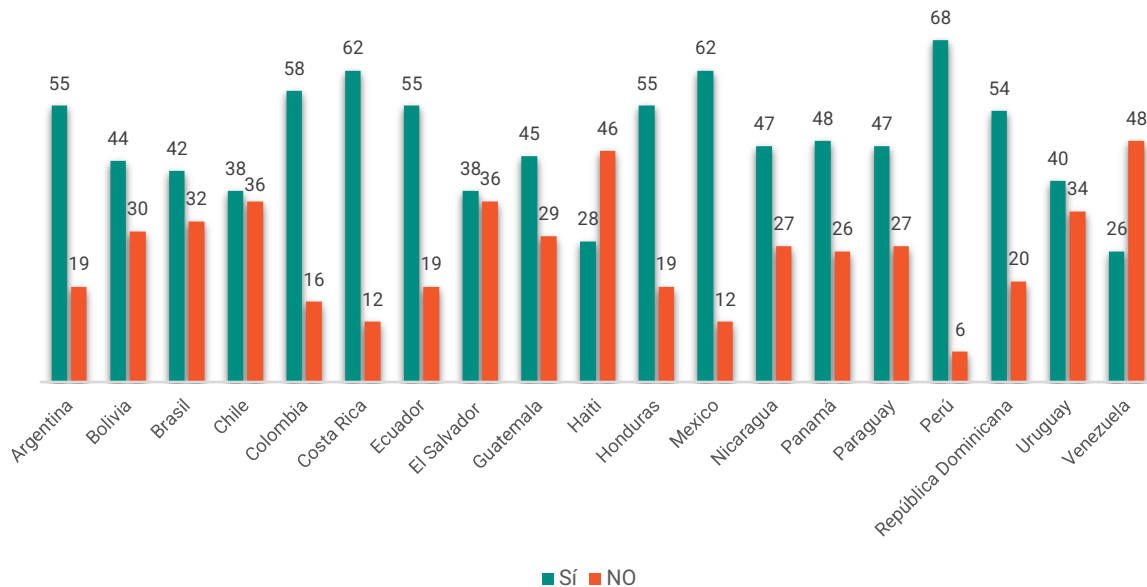
- A nivel regional se cuenta con un amplio cuerpo normativo con disposiciones necesarias para luchar contra la corrupción. En efecto, frente a la indagación por la existencia de normas o de jurisprudencia relacionada con los 19 compromisos analizados, el 64,9% de las preguntas fue respondido de manera positiva.
- En términos generales, el mayor desarrollo normativo en la región se encuentra en las regulaciones relativas al *financiamiento de campañas*, específicamente en la reglamentación de medidas de transparencia, rendición de cuentas y manejo de recursos a través del sistema bancario.
- Ahora bien, la información recolectada evidencia que el eje temático de *fortalecimiento de la gobernabilidad* es el que menor desarrollo normativo tiene. Al respecto, 47,1% de las preguntas normativas se respondieron de manera negativa.

1.1. Avances Normativos por País Participantes del OCC

La revisión de las normas existentes para enfrentar la corrupción en la región muestra desarrollos distintos entre los 19 países participantes del OCC, como se puede observar en la siguiente gráfica:

Gráfica 3: Comparativo regional del resultado de los indicadores normativos

Comparativo Regional del Resultado de los Indicadores Normativos



Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC

- Entre los países con mayor cantidad de indicadores de norma contestados de forma negativa (es decir que denotan ausencia de normas) se encuentran Venezuela, Haití, Chile, El Salvador y Uruguay. Mientras que, Perú, México y Colombia destacan como los países con el mayor número de respuestas afirmativas, indicando la existencia de normas vigentes⁹.
- Si bien el ejercicio comparado entre países y cantidad de normas existentes para luchar contra la corrupción no es suficiente para determinar las condiciones de cada país con el fin de enfrentar este fenómeno, sí ofrece una información que permite identificar las fortalezas, debilidades y/o vacíos entre la existencia de normas y su implementación efectiva (actividad que se desarrollará a través del análisis de los indicadores de práctica).

⁹ Es importante aclarar que la existencia de normas no implica la implementación de estas, este análisis se realizará en el segundo informe de resultados, en el que se contrastan los indicadores normativos con los de práctica.

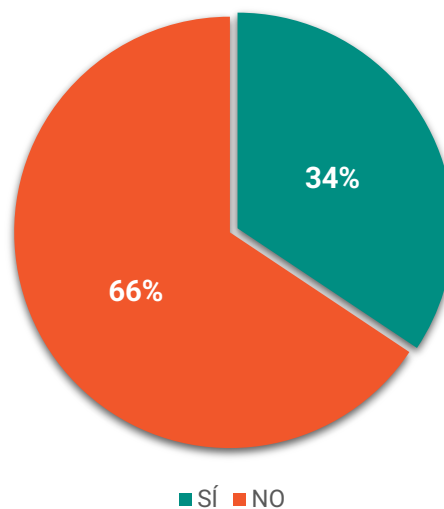
1.2. Avances Normativos Tras la Firma del Compromiso de Lima.

Teniendo en cuenta que la Cumbre de Lima se llevó a cabo en el año 2018 y como resultado de ésta se firmó el Compromiso de Lima, es importante revisar si ha habido recientes desarrollos de normas o jurisprudencia.

La siguiente gráfica compara el porcentaje de normas desarrolladas de manera posterior al Compromiso de Lima de 2018 con las normas previamente existentes en la materia. Para indagar por este desarrollo, los indicadores normativos incluyeron 12 preguntas específicamente enfocadas a determinar si en los dos últimos años se habían promulgado nuevas normas en torno a los temas que abordan los compromisos:

Gráfica 4: Desarrollos normativos posteriores al 2018

Desarrollos Normativos Posteriores al 2018



Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC

- Los resultados muestran que más de la mitad de las normas para avanzar en la lucha contra la corrupción existían antes de la firma de Compromiso de Lima. Esta situación indica que, por lo menos a nivel normativo y jurisprudencial, los países que fueron analizados por el OCC, antes de la celebración del Compromiso ya contaban con un marco normativo amplio para la promoción de medidas de lucha contra la corrupción.
- A nivel regional, la mayor parte de los desarrollos normativos recientes se relacionan con la implementación de políticas y planes nacionales de Gobierno Abierto. Sin embargo, Brasil, Chile, Nicaragua y Venezuela actualmente no tienen políticas ni



planes nacionales sobre gobierno electrónico y participación digital, que se relacionen directamente con medidas de lucha contra la corrupción.

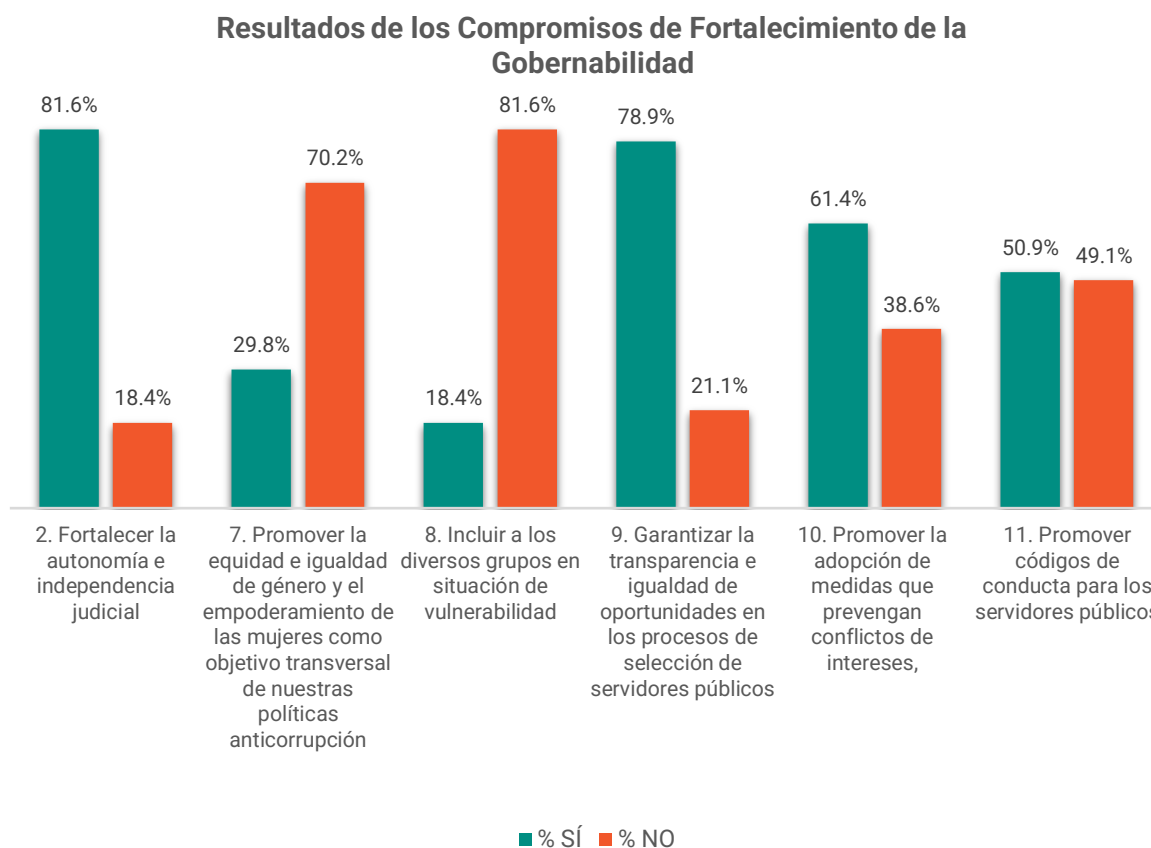
- Un aspecto innovador en el Compromiso de Lima es la inclusión del enfoque de género y de los grupos en condición de vulnerabilidad en las políticas de lucha contra la corrupción. Desafortunadamente, estos temas presentan el menor desarrollo normativo en la región. De hecho, durante los últimos 2 años, solamente Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú presentan algún tipo de avance normativo para la inclusión de estos grupos en políticas y medidas para fortalecer la gobernanza y enfrentar la corrupción. Lo anterior reitera la importancia que los países de la región deben darles a estos nuevos enfoques de lucha contra la corrupción, en el corto y mediano plazo, de manera que complemente el marco normativo existente en la materia.
- Frente a las normas previas al 2018, se encuentra que 16 de los países participantes en el OCC cuentan con legislación destinada a garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección a los servidores públicos. En torno a estos temas, después de 2018, solamente 6 países –Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú– han promovido nuevos desarrollos normativos para reglamentar aspectos como el mérito, la equidad y la aptitud en el empleo público, según lo indica el compromiso No. 9.
- Asimismo, todos los países participantes en el OCC tienen normas anteriores al 2018 que abordan temas relativos al uso de sistemas electrónicos para compras públicas y contrataciones gubernamentales. Frente a esto 7 países –Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú– han realizado avances legislativos complementarios, luego de 2018, para fortalecer estos sistemas electrónicos.

2. Avances Normativos de los Compromisos por Eje Temático:

2.1. Compromisos de Fortalecimiento a la Gobernabilidad Democrática.

En el tema de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, se analizaron 6 compromisos específicos, mediante 20 indicadores normativos (preguntas). La siguiente gráfica muestra los resultados respecto a cada compromiso:

Gráfica 5: Resultados de los Compromisos de Fortalecimiento de la Gobernabilidad



Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC

- En cuanto al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la mayor parte de los avances normativos se concentran en la *reglamentación de medidas para garantizar la autonomía e independencia judicial y la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección a servidores públicos*, temas que tradicionalmente se han venido abordando desde la definición de políticas de integridad y lucha contra la corrupción en la región.
- La mayoría de los avances normativos en este tema son previos a la suscripción del Compromiso de Lima. Precisamente por esto, llama la atención que no se encuentren mayores desarrollos en torno a las medidas para la prevención y trámite de los conflictos de intereses, así como de códigos de conducta de los servidores públicos, temas que han venido siendo priorizados en compromisos internacionales o regionales previos como la UNCAC y que en el Compromiso de Lima se reiteran.¹⁰
- Frente a la inclusión de nuevos actores, destacan los compromisos No. 7 y 8 encaminados a *promover la inclusión de género y de grupos en condición de*

¹⁰ Compromiso registrado en los artículos 7 y 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corruptcion.pdf

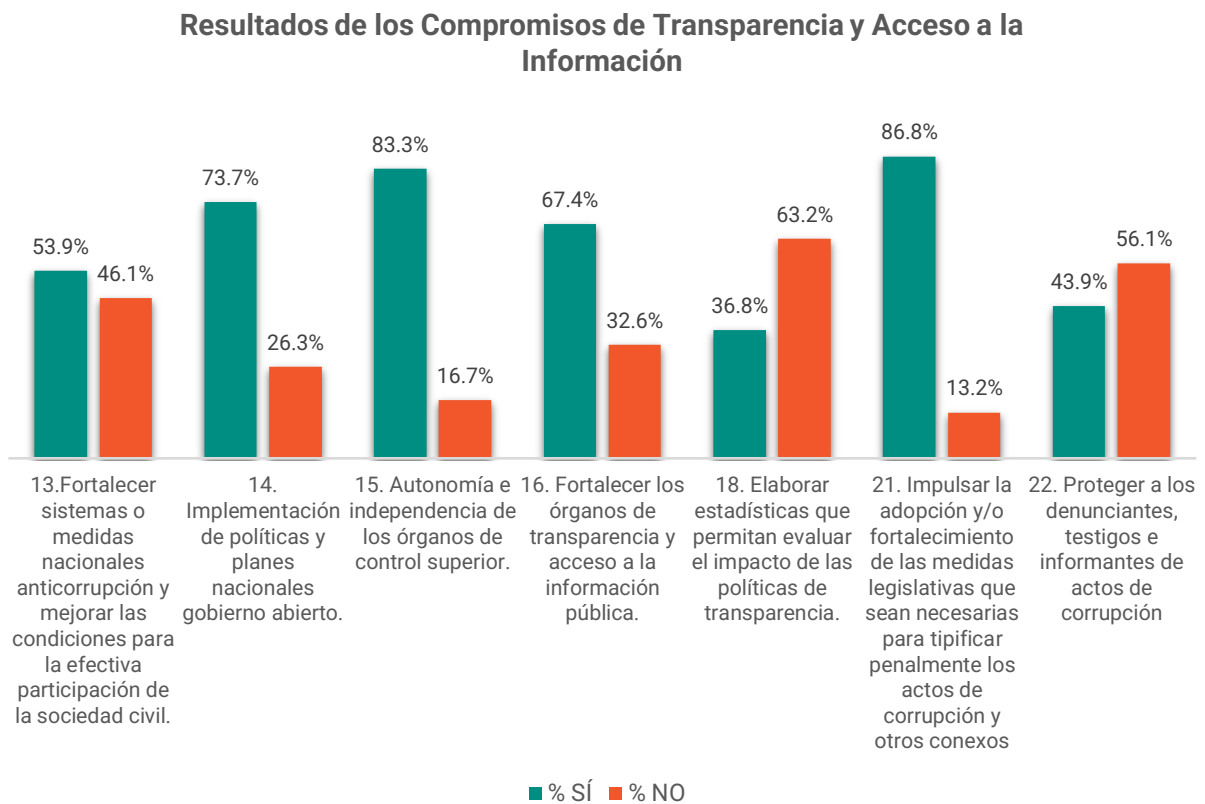
vulnerabilidad en las políticas anticorrupción. Como ya se mencionó, la información recogida indica que estos temas, para la mayoría de los países de la región, son los que presentan el menor desarrollo normativo.

- No obstante, se debe resaltar los casos de Argentina, Costa Rica y Panamá, países que actualmente cuentan con normas enfocadas a *promover la equidad e igualdad de la mujer en las políticas anticorrupción.* Por su parte Costa Rica, Panamá y Perú han incorporado en su marco normativo herramientas para la incluir en las políticas anticorrupción, los grupos en condición de vulnerabilidad.

2.2. Compromisos de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Denunciantes y Derechos Humanos, Incluyendo la Libertad de Expresión.

En este tema se priorizaron 7 compromisos mediante 28 indicadores normativos (preguntas), en torno a la garantía de acceso a la información, generación de estadísticas y datos que permitan estimar el impacto de las medidas anticorrupción y la protección de denunciantes de corrupción, entre otros. La siguiente gráfica muestra los resultados comparados por compromiso:

Gráfica 6: Resultados de los compromisos de transparencia y acceso a la información.



Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC



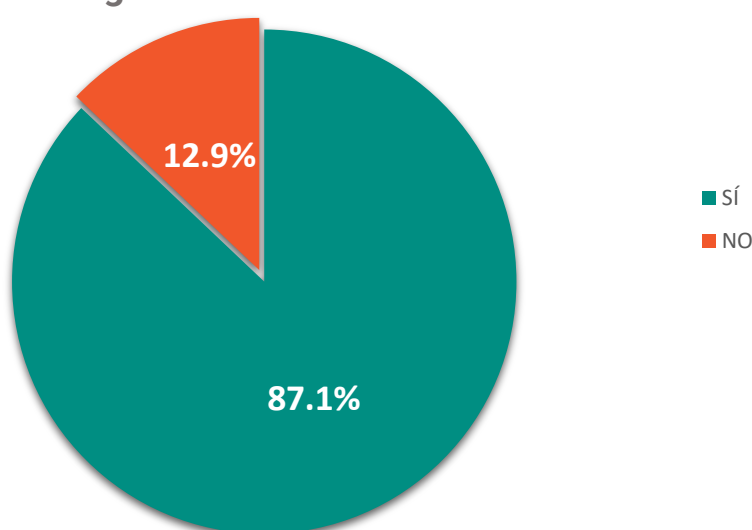
- Desde la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996, se han venido asumiendo compromisos en los países de la región para la promoción de políticas y planes para fortalecer los sistemas de denuncia, gobierno abierto, y los órganos de transparencia y acceso a la información. Estos compromisos coinciden con los temas en los cuales hay mayor desarrollo normativo en los países participantes en el OCC. Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, son los países que más destacan en los desarrollos normativos de estos temas.
- No obstante, estas normas todavía no incluyen el desarrollo o la generación de estadísticas que evalúen el impacto de las políticas y los planes de transparencia desde la ciudadanía, de acuerdo con los términos que se indican en el compromiso No. 18. De la información revisada, solamente 4 países –Argentina, Colombia, Paraguay y Perú– cuentan con un órgano encargado y con manuales o formatos para evaluar el impacto de las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.
- La tipificación penal de los delitos de corrupción como se mencionan en el compromiso No. 21, también se destaca como uno de los temas en los cuales hay mayor desarrollo normativo en la región. Es importante mencionar que desde la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), se vienen priorizando estos temas en los desarrollos normativos, por lo tanto, llama la atención que Brasil y Venezuela a la fecha, no cuenten con normas vigentes que tipifiquen como conductas penales los actos de corrupción y conexos.
- *La promulgación de normas para la protección a los denunciantes, testigos/as e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias* (compromiso No. 22), es todavía una tarea pendiente de varios países de la región. A pesar de que la protección a denunciantes es un compromiso que se viene reiterando desde la Convención Interamericana Contra la Corrupción, la falta de desarrollo normativo sobre este tema en la región es evidente. Por ejemplo, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana todavía no se cuenta con normas que desarrollen la definición de denunciante, testigo/as o informante de actos de corrupción, ni con protocolos o medidas que orienten sobre la forma de realizar denuncias, evaluaciones de amenazas y otros incidentes de intimidación a denunciantes. Este rezago en términos normativos es más evidente en los países de Argentina, Chile, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, países que a la fecha no cuentan con legislación alguna que aborde este tema.

2.3. Compromisos de Financiamiento de Organizaciones Políticas y Campañas Electorales.

En este tema se priorizó el compromiso No. 25, frente al cual se analizaron 11 indicadores normativos (preguntas), sobre las medidas de transparencia, rendición de cuentas, contabilidad, y bancarización de los recursos para las campañas políticas. La siguiente gráfica presenta los resultados obtenidos:

Gráfica 7: Resultados de los compromisos de financiamiento de organizaciones políticas.

Resultados de los Compromisos de Financiamiento de Organizaciones Políticas.



25. Impulsar la adopción y/o fortalecimiento de medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de las organizaciones y partidos políticos, principalmente de sus campañas electo

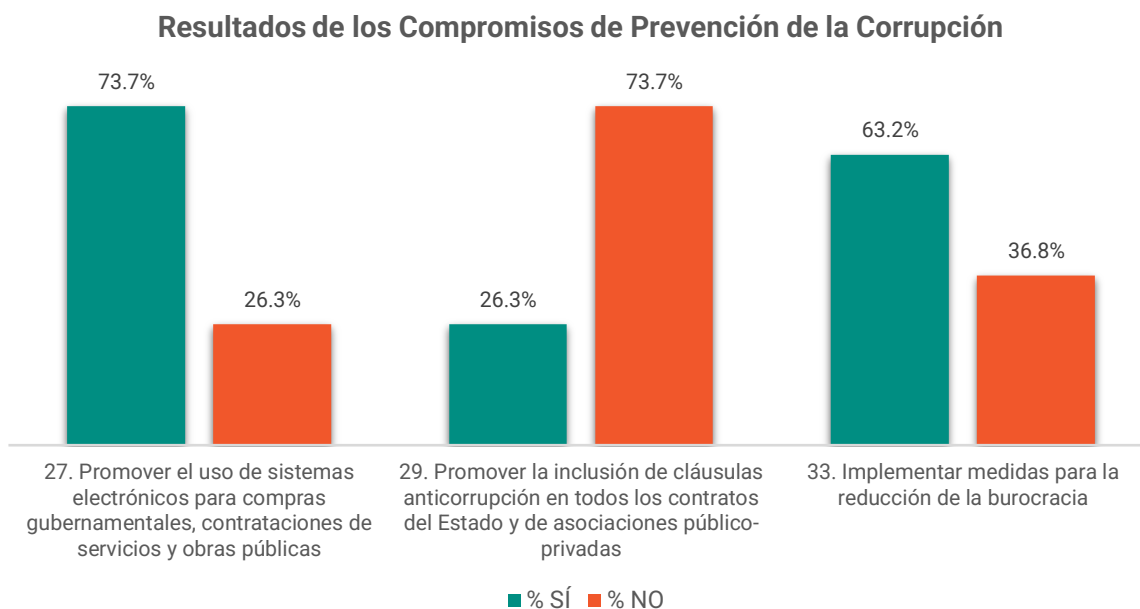
Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC

- Como se indicó en las tendencias regionales, este compromiso presenta el mayor desarrollo normativo en la región. No obstante, en El Salvador y Venezuela la información sobre la rendición de cuentas de los partidos políticos y candidatos todavía no es carácter público.
- Al respecto, El Salvador, es el único país de los participantes en el OCC que a la fecha no cuenta con formatos obligatorios, establecidos por la ley para que los candidatos rindan cuentas sobre sus ingresos y gastos de campaña.

2.4. Compromisos de Prevención de la Corrupción en Obras Públicas, Contrataciones y Compras Públicas

Este tema se analizó a través de 3 compromisos y 9 indicadores normativos (preguntas), como se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 8: Resultados de los compromisos de prevención de la corrupción.



Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC

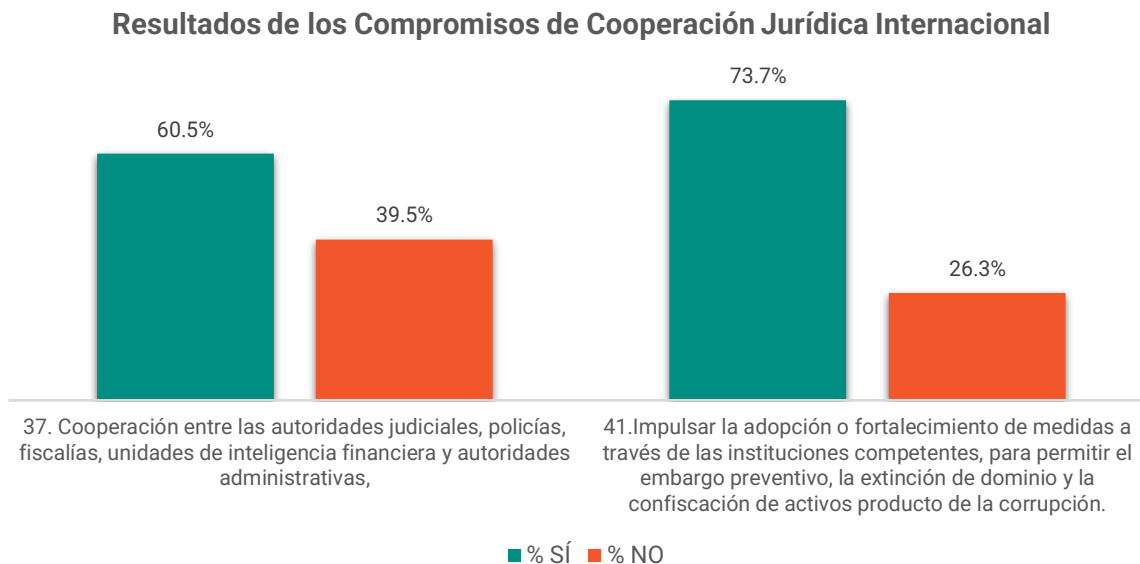
- Como se ha venido destacando, las medidas como la promoción de sistemas electrónicos para compras gubernamentales y contrataciones de servicios o la reducción de la burocracia, que tradicionalmente han sido aplicadas para la lucha contra la corrupción, arrojan los mayores desarrollos normativos en la región. Es importante mencionar que estos temas se han ido incorporando desde la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996.
- No obstante, actualmente Haití y Venezuela no cuentan con una plataforma electrónica de acceso público que permita consultar los procesos de compra y contratación gubernamental.
- Otras medidas de lucha contra la corrupción, como *la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos estatales*, aún requieren de mayores desarrollos normativos. Del análisis realizado, solamente 5 países —Argentina, Brasil, Honduras, Nicaragua y Perú— tienen establecida la obligatoriedad de estas cláusulas anticorrupción en los contratos.
- *La implementación de medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites* es una de las acciones que está ganando fuerza como acción de lucha contra la corrupción (BID. 2018). Sin embargo, en varios países de la región esta tarea todavía

no se ha desarrollado, tal es el caso de —Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela—, donde no se encontraron desarrollos normativos enfocados en identificar o eliminar los trámites en los que la ciudadanía encuentra más dificultades.

2.5. Compromisos de Cooperación Jurídica Internacional; Combate al Cohecho, al Soborno Internacional, al Crimen Organizado y al Lavado de Activos; y Recuperación de Activos.

La siguiente gráfica destaca los resultados de los indicadores normativos de los 2 compromisos priorizados en temas de cooperación jurídica internacional, a través de 6 indicadores normativos (preguntas):

Gráfica 9: Resultados de los compromisos de cooperación jurídica internacional.



Elaboración propia a partir de la información diligenciada por las OSC participantes del OCC

- Frente a los compromisos relacionados con *acciones para que las autoridades y órganos de control compartan información para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción*, la información analizada indica que hay un buen desarrollo normativo en la región.
- Bolivia y Haití son los únicos países que no cuentan con medidas de cooperación para el intercambio de información entre las autoridades judiciales para facilitar las investigaciones asociadas a los actos de corrupción.
- Frente a las *medidas para el fortalecimiento del embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción*, Argentina, Guatemala, Paraguay y



Perú cuentan con entidades, lineamientos y procedimientos definidos a nivel de norma para la confiscación y administración de los bienes con medida de embargo en procesos judiciales por actos de corrupción.

- Se debe destacar que, para los 2 compromisos analizados en este eje temático, Paraguay y Perú son los países que registran un cumplimiento del 100% respecto a los indicadores normativos relativos a la cooperación judicial, combate al cohecho y al soborno.

Conclusiones:

Este informe preliminar de resultados presenta un primer balance de los desarrollos normativos en la región para avanzar en la lucha contra la corrupción. En general los 19 participantes del OCC cuentan con un marco normativo amplio para avanzar en la lucha contra la corrupción. Si bien se identifican acciones para fortalecer y nuevos temas que deben incluirse para avanzar en la lucha contra la corrupción, la existencia previa de este marco normativo debe considerarse como un elemento positivo para contrarrestar los efectos nocivos de este flagelo en la región.

El ejercicio destaca que a nivel normativo los países de la región vienen cumpliendo con la regulación de los enfoques tradicionales de lucha contra la corrupción y, que los temas innovadores incluidos en el Compromiso de Lima representan un nuevo reto para avanzar en el tema. Ahora bien, no todos los 19 países presentan el mismo nivel de desarrollo normativo. Los datos analizados muestran que algunos países se destacan por temas como el fortalecimiento de las políticas y planes nacionales en materia de gobierno abierto, la implementación de plataformas electrónicas para las contrataciones y compras públicas, y otros por medidas para la reducción de la burocracia y la simplificación de trámites.

Se debe enfatizar que el Compromiso de Lima reitera las acciones en torno a estos temas, los cuales se vienen priorizando desde hace más de dos décadas a través de convenios como la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996, la Convención de la OCDE contra el Soborno Transnacional de 1997 y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de 2003. No obstante, temas como la protección a denunciantes, testigos/as o informantes de actos de corrupción y la promoción de códigos de conducta a los servidores públicos, que también se incluyen en estos compromisos previos a la Cumbre de Lima, presentan un desarrollo normativo relativamente bajo en este seguimiento.

Así mismo, en la revisión realizada por el Grupo de Expertos¹¹ al Compromiso de Lima se destaca la importancia de incluir en la lucha contra la corrupción medidas para la protección a denunciantes, informantes y testigos, el establecimiento de un registro de personas

¹¹ En diciembre de 2018, en el marco de la celebración del 15° aniversario de la UNCAC cerca de 80 expertos en corrupción de más de 40 países del mundo, analizaron el texto adoptado del Compromiso de Lima y sobre lo acordado compartieron sus consideraciones sobre las lecciones aprendidas en relación con la investigación de casos de corrupción, el impacto que tienen los actos de corrupción en materia seguridad y goce efectivo de los derechos y, definieron algunas buenas prácticas para la lucha contra este flagelo



naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción para evitar su contratación con el Estado, y el fortalecimiento de los procesos de fiscalización y administración de los bienes incautados en los procesos asociados con la corrupción, con el fin de alcanzar desde un enfoque multidisciplinario mayor efectividad en prevención y la lucha contra la corrupción.

Al analizar esta información se encuentra que, en los países analizados por el OCC, estos temas cuentan con un desarrollo normativo promedio menor al 60%. Esta situación evidencia la necesidad e importancia de avanzar en la promulgación de normas al respecto que, además, vengán acompañadas de políticas y planes de acción que permitan la adopción de las buenas prácticas identificadas por los expertos.

Es preciso señalar que, si bien la existencia de normas y desarrollos jurisprudenciales son necesarias para la lucha contra la corrupción, éstos no son suficientes para enfrentar este flagelo, si no vienen acompañados, por una parte, de la efectiva regulación e implementación de la normativa y por otra, de la existencia de voluntad política y del desarrollo de capacidades administrativas, humanas, técnicas, tecnológicas, y financieras, entre otras. No obstante, este balance preliminar muestra la necesidad de abordar distintas estrategias nacionales y regionales para apoyar a los países que presentan los menores desarrollos normativos relacionados con los compromisos de lucha contra la corrupción.

Como parte del trabajo que está adelantando el Observatorio Ciudadano de Corrupción, en cada país se complementará este seguimiento a los desarrollos normativos, con la revisión de las acciones, programas, planes y políticas públicas (indicadores de práctica), y con la valoración del avance en los compromisos, para poder presentar un panorama más completo en términos del avance o cumplimiento con el Compromiso de Lima.

Bibliografía:

- Banco Interamericana de Desarrollo –BID–. (2018). El fin del trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital. Benjamin Roseth, Angela Reyes, Carlos Santiso, editores. Disponible en: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-fin-del-tr%C3%A1mite-eterno-Ciudadanos-burocracia-y-gobierno-digital.pdf>
- Cumbre de las Américas. (2018). Compromiso de Lima: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Disponible en: <https://viiiicumbreperu.summit-americas.org/compromiso-de-lima-gobernabilidad-democratica-frente-a-la-corrupcion/>
- Observatorio Ciudadano de la Corrupción. (S.F). Metodología. Página oficial. Disponible en: <https://occ-america.com/metodologia/>



- Observatorio Ciudadano de Corrupción & Transparencia por Colombia. (2021a). 19 compromisos priorizados. Disponible en: <https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/19-compromisos-priorizados-de-lima.pdf>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2003). Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corruption/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf
- Organización de los Estados Americanos (1996). Convención Interamericana contra la corrupción. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.asp